

EL GOLPE Y SUS METAMORFOSIS

THE COUP AND ITS METAMORPHOSES

SERGIO VILLALOBOS-RUMINOTT
Dr. en Literatura Latinoamericana
Universidad de Michigan, Estados Unidos
svillal@umich.edu
<https://orcid.org/0000-0002-9570-6780>

*Artículo recibido el 27 de junio de 2023;
aceptado el 10 de julio de 2023.*

Cómo citar este artículo:

Villalobos, S. (2023). El golpe y su metamorfosis. *Revista Palabra y Razón*, 23, pp. 114-133. <https://doi.org/10.29035/pyr.23.114>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Reconocimiento-No-Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

RESUMEN

Este es un ensayo de intervención relativo a la persistencia del golpe de estado en Chile, en 1973, y sus consecuencias en el Chile post-dictatorial. Bajo la hipótesis de que el mismo golpe ha sido reducido a su representación mediática y monumental, se critican las lecturas excepcionalistas que lo sindicaron como un accidente del que ya nos habríamos recuperado, al recuperar la democracia. Esta interpretación, que marca la convergencia de los sectores políticos oficiales durante la llamada transición, ha impedido ver que uno de los efectos centrales del golpe es el desplazamiento de un contrato social liberal y democrático, por un nuevo tipo de pacto de carácter neoliberal, el que se complementa con una mediarquía que tiende a reducir la complejidad de los procesos históricos al tiempo acontecimental de los medios y los sondeos de opinión.

Palabras claves: Revisionismo / rehabilitación / metamorfosis / golpe / mediarquía

ABSTRACT

This is an essay related to the persistence of the coup d'état in Chile, in 1973, and its consequences in post-dictatorial times. Under the hypothesis that the coup itself has been reduced to its mediatic and monumental representation, we proceed to criticize the exceptionalist readings that syndicate it as an accident from which we would have already recovered, by recovering democracy. This interpretation, which marks the convergence of the official political sectors during the so-called transition, has prevented us from seeing that one of the central effects of the coup is the displacement of a liberal and democratic social contract, by a new type of neoliberal pact; a pact that is complemented by a mediarchy that tends to reduce the complexity of historical processes to the eventual time of the mass-media and opinion polls.

Keywords: Revisionism / rehabilitation / metamorphosis / coup / mediarchy

I. Introducción

¿Qué significa conmemorar los 50 años del golpe de Estado en Chile? ¿Acaso estos 50 años nos dan la distancia necesaria para evaluar tanto la intervención militar como la historia que le siguió? A estas preguntas habría que sumar estas otras: ¿hemos superado realmente las condiciones que llevaron al golpe y a su prolongación dictatorial?, ¿es cierto que el golpe constituye un evento pasado, trágico y lamentable, pero que necesitamos olvidar, para avanzar en un proceso de reconciliación y desarrollo nacional? Y, por supuesto, estas últimas preguntas nos llevan a otras aún más contingentes: ¿hasta qué punto la transición a la democracia inaugurada con el plebiscito de 1988 constituyó una superación real del horizonte dictatorial? O, alternativamente, ¿qué relación hay entre el golpe y la actualidad, es decir, entre el golpe y las revueltas sociales, la fallida Convención Constituyente y la nueva comisión encargada de reemplazar (remozar) la Constitución de 1980?

Por supuesto, la sociedad chilena que sufrió el golpe ya no es la nuestra, en la medida en que dicha intervención militar también puede ser leída como un proceso de transformación radical relativa no solo a la implementación del neoliberalismo, sino también al reemplazo del marco jurídico-institucional que había definido, hasta ese entonces, la historia política y social del país.¹ Sin embargo, lejos de concebir el golpe como un acontecimiento único e irrepetible, sería pertinente considerarlo como un evento inscrito en una serie que tiende a repetirse y perpetuarse, a pesar de las diversas operaciones de blanqueamiento, denegación y revisión con las que se lo quiere justificar. En tal caso, cuando afirmamos que aún nos encontramos domiciliados en su horizonte no queremos negar las transformaciones del país, ni desmerecer los esfuerzos orientados a su efectiva democratización, sino que pretendemos mostrar cómo el golpe se repite y se actualiza para perpetuar sus efectos en nuestro presente más inmediato. Por otro lado, si no atendemos a estas metamorfosis y repeticiones corremos el riesgo de converger con la lectura excepcionalista que lo sindicó como un exceso puntual, lamentable pero necesario, del que ya nos habríamos recuperado, recuperando de paso nuestra supuesta tradición democrática.²

1 La tesis central del libro de Renato Cristi y Pablo Ruiz Tagle, *La república en Chile* (2007), apunta al carácter soberano de la dictadura chilena, es decir, muestra cómo la intervención militar no estaba orientada a la restitución del orden constitucional supuestamente alterado por el gobierno de la Unidad Popular, sino a la refundación del orden jurídico-político y constitucional ya desde el día después del golpe.

2 Nótese que esta es la posición oficial de los gobiernos transicionales, incluyendo aquellos de Sebastián Piñera, posición ostentada además por una nueva derecha no pinochetista, al menos nominalmente.

Una de las consecuencias más ostensibles de esta reducción del golpe a una intervención militar acotada e inevitable consiste en la división de la historia nacional entre un antes y un después, cuestión que hace aparecer a la Unidad Popular como un régimen democrático ejemplar o, alternativamente, como la causa final del golpe. En efecto, este tipo de interpretaciones terminan por imposibilitar un debate sobre el pasado inmediato, produciendo en cambio un proceso de mistificación que impide su elaboración. Contra esta naturalizada lectura queremos afirmar que el golpe no fue solo una brutal intervención militar coordinada y apoyada por Estados Unidos y perpetuada por el régimen militar bajo la retórica salvífica del anti-comunismo, característico del *Containment* y la Guerra Fría. También fue el comienzo de una profunda transformación de la sociedad chilena en el contexto de la transición desde el pacto liberal-democrático que definió la historia nacional y continental durante gran parte del siglo XX, hacia el nuevo pacto neoliberal que desde entonces impera en el país y en la región.

En términos históricos, el pacto liberal-democrático resultó ser un dispositivo de contención de las nuevas masas urbanizadas en el contexto de las migraciones campo-ciudad y del desarrollo de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones, a principios del siglo XX. Este desplazamiento político y económico conllevó la crisis del pacto oligárquico característico del siglo XIX y la configuración de un nuevo horizonte político asociado con el desarrollo paulatino de las lógicas nacional-populares, movilizadas por un pueblo-nación que políticamente fue organizado bajo la interpelación populista clásica. En este horizonte general, las grandes experiencias políticas de masas en el siglo XX estuvieron marcadas por lógicas gubernamentales que debían equilibrar las demandas propias del sistema capitalista y las presiones democratizadoras surgidas desde los movimientos sociales. Para obtener dichos equilibrios, siempre precarios, se desarrolló una serie de estrategias de contención, identificación e interpelación que permitieron albergar esperanzas en el desarrollo económico-social de los países latinoamericanos; sin embargo, el golpe, que su vez debe ser inscrito en una serie de intervenciones similares a nivel regional, marca el fin de ese modelo de gubernamentalidad e inaugura un nuevo pacto o contrato social, pero ahora sin sociedad, esto es, un pacto neoliberal en el que la política es expropiada de la escena pública y relegada, vía recortes jurídicos y mediáticos, al ámbito de los expertos.

Sostener entonces que el golpe del 11 de septiembre de 1973 no es un evento excepcional e irrepetible, sino una representación fetichizada de una serie de golpes que limitaron fuertemente al gobierno de

Salvador Allende,³ y que en plena dictadura siguieron repitiéndose bajo la lógica de un permanente estado de shock aplicado, *manu militari*, a la sociedad chilena. O, incluso, afirmar que el golpe sigue repitiéndose en la perpetuación del marco jurídico y constitucional implementado por la dictadura en pleno siglo XXI, lo cual implica romper con la representación mediática del golpe como un ataque inimaginable al Palacio de gobierno y como una traición inesperada, la que pudo ser superada gracias a que la transición fue concebida también como ‘recuperación’ de nuestra tradición democrática. En otras palabras, al historizar el golpe de Estado de 1973, este ya no aparece reducido solo a su representación trágica y mediática, sino como efecto de una estrategia de control y contención de los procesos de democratización que venían incubándose en la sociedad chilena desde por lo menos comienzos del siglo XX. De la misma manera, la dictadura ya no aparece como un régimen de excepción, superado paulatina pero sostenidamente por los gobiernos transicionales. Más bien, como la puesta en escena de un marco jurídico-político en el que todavía estamos domiciliados. Consecuentemente, la llamada transición a la democracia, que desde el comienzo estuvo limitada por enclaves autoritarios y por un marco constitucional que perpetuaba las condiciones materiales de la gubernamentalidad dictatorial, deja de aparecer como el fin de la dictadura y se muestra como su continuación metamorfoseada.

En otras palabras, sin alterar mayormente los llamados pilares del régimen militar,⁴ los gobiernos post-dictatoriales combinaron una retórica pro-globalización y neo-desarrollista, con una política relativa a los derechos humanos con efectos más simbólicos que reales. Cuestión que les permitió perpetuarse en la administración del Estado prometiendo suturas simbólicas sobre un pasado mistificado y sepultado. La tan elogiada transición chilena, ejemplo de consenso y gobernabilidad democrática, en realidad se muestra como la puesta en escena de un nuevo contrato social sostenido por un marco constitucional ilegítimo y por un acuerdo convergente entre actores políticos formales, oficialistas y de oposición,

3 En el segundo volumen de su *Historia de la Unidad Popular* (2020), Jorge Magasich Airola muestra la serie de iniciativas golpistas orientadas a impedir la asunción de Allende y a obstaculizar su gobierno en los meses posteriores a su triunfo electoral. De la misma manera, en la primera parte de *La batalla de Chile*, titulada *La insurrección de la burguesía* (1975), Patricio Guzmán organiza el relato enfatizando las diversas estrategias e intentos de golpes que fueron allanando el paso para el pronunciamiento del 11 de septiembre.

4 Plan laboral; prácticas diseminadas de subcontratación; sistema de AFPs; sistema tributario; privatización y precarización de la educación pública y universitaria; privatización y precarización del sistema de salud pública; desregulación del sistema bancario; fomento de la industria forestal y extractivista en general; junto a la paulatina privatización del cobre y otras industrias estratégicas, la privatización y monopolio de las aguas y, por supuesto, la persistencia de la Constitución de 1980 (Fundación SOL). A estos pilares hay que añadir los enclaves autoritarios que limitan el proceso de democratización, a pesar de las reformas constitucionales, sobre todo, el sistema electoral binominal.

cuestión que derivó en un duopolio que se ha turnado en el gobierno, sin alterar mayormente el plan de gestión gubernamental.⁵

Por supuesto, el problema surge cuando constatamos que la gestión gubernamental del duopolio chileno, basado en un pacto juristocrático; esto es, un pacto que consiste en la subordinación de los problemas sociales a un marco jurídico-institucional que funciona conteniéndolos y neutralizándolos, pero que no alcanza para contener las inevitables crisis sociales que recortan el excepcionalismo sistema democrático chileno, mostrándonos su rostro represivo: ya sea que nos refiramos a los paros y huelgas nacionales de los años 80s, los que precipitaron la crisis del mando dictatorial, para ser luego instrumentalizados por la nueva lógica política transicional, o que reparamos en las reiteradas revueltas estudiantiles (mochilazo, revolución pingüina, estallido social, etc.), regionales o sectoriales. Lo cierto es que la celebrada gobernabilidad chilena es solo una superestructura destinada a maquillar la dinámica constitutiva de la gubernamentalidad neoliberal, la que consiste en la radicalización de los procesos de extracción, devastación y acumulación, generando inevitablemente precarización y crisis social.

¿Por qué entonces se nos hace tan difícil entender que el golpe —junto a sus repeticiones en dictadura y postdictadura— no está en el pasado, como un evento clausurado, sino que aquí mismo entre nosotros, definiendo todavía el horizonte en el que habitamos? ¿A quién conviene esta representación mistificada del golpe? ¿Quién se beneficia con la cancelación del debate sobre sus metamorfosis desde una noción excepcionalista y acontecimental que lo reduce a su representación mediática y monumental y lo sindicada como evento originario que necesariamente debemos superar? En lo que sigue intentamos mostrar algunas estrategias funcionales a este proceso de deshistorización que son a su vez instrumentales para la perpetuación de la gubernamentalidad neoliberal, inaugurada ejemplarmente por el golpe, pero desplegada en plenitud durante las últimas décadas.

2. La verdad de la transición

5 De hecho, el duopolio ha prolongado la gubernamentalidad dictatorial, enfatizando los procesos de desregulación y privatización, cuestión que se confirma con el incremento de casos de colusión y corrupción a nivel de las corporaciones privadas y de las instituciones del mismo Estado. Piénsese, por un lado, en los casos de colusión de la banca, en el comercio detallista, en la fijación de precios, etc., mientras que por otro lado, piénsese en el escándalo de las AFPs (y en la existencia de un sistema de pensiones alternativo para funcionarios de las fuerzas armadas), la ley de pesca, los desfalcos en carabineros y en el ejército, entre otros. Todo esto, lejos de constituir problemas puntuales en la implementación del modelo, delata que la gubernamentalidad neoliberal genera un tipo de corrupción estructural e inherente a sus procesos flexibles de acumulación, explotación y explotación.

Basada en una obra de teatro inédita de Antonio Skármeta, titulada *El plebiscito*, la película *No* (2012) dirigida por Pablo Larraín, muestra el plebiscito de 1988 como una serie de luchas por posicionar las alternativas en juego en el espacio programado de la representación televisiva. Efectivamente, la película muestra que la verdadera transición que se está elaborando en dicho contexto no es solo desde la dictadura a la democracia, sino desde la política concebida como una actividad de masas relativa a la organización de las voluntades colectivas, hacia la política como una cuestión relativa a la representación televisiva entendida como una organización de los afectos a partir de la producción de estrategias publicitarias eficientes. No se trata de criticar la forma en que la película reduce, interesada o ideológicamente, la complejidad de las luchas sociales que precipitaron al mismo plebiscito, como salida pactada desde la crisis de mando de la dictadura, ni menos mostrar que la película repite un gesto de denostación de los movimientos sociales anti-dictatoriales, cuestión que habría aparecido en el recorte operado por sus películas previas (pues *Tony Manero* es una representación grotesca y patética a la vez, de los imaginarios televisivos en dictadura). Se trata, por el contrario, de atender a la forma en que la película tematiza la reducción de la complejidad de estos procesos históricos por parte de una nueva lógica política en la que participan tanto los partidarios de Pinochet como sus oponentes oficiales. En otras palabras, la película tematiza la imposición de un tiempo *événementielle* o mediático sobre el tiempo histórico en el que se desarrollan las luchas anti-dictatoriales, imposición necesaria para expropiar las aspiraciones populares a la democracia y reconducirlas a la tibia transición pactada.

Esta expropiación es, sin más, la cancelación de una forma histórica de entender la política y la democracia, y viene a confirmar el efecto del golpe como cancelación de un proyecto nacional-popular de democratización. En este sentido, la película muestra que la verdadera continuación de la dictadura no radica en la figura de Pinochet, sino en la consolidación del golpe como reducción del tiempo complejo de la política al tiempo mediático de la representación estandarizada. A partir de esta operación, la política en post-dictadura parece estar definida por indicadores de rating y por encuestas de opinión, sondeos y estudios superficiales, mientras que las manifestaciones de desacuerdo social parecen quedar relegadas al ámbito de la ilegalidad y de la criminalidad, cuando no del terrorismo, obliterando de esta manera todas las prácticas de auto-organización y participación social que no se ciñan al marco juristocrático del duopolio nacional (de ahí también se sigue el uso reiterado de la noción de anomia, desde Eugenio Tironi en los 80s, hasta Carlos Peña en el contexto de las últimas revueltas). He aquí entonces una de las estrategias constitutivas de la perpetuación dictatorial, la reducción de las reiteradas protestas sociales

en dictadura y post-dictadura al estrecho marco jurídico e institucional de la gubernamentalidad neoliberal, reforzado a la vez por la configuración de un horizonte estandarizado y mediático de relevancia política, al que se han supeditado tempranamente las ciencias sociales atravesadas por una marcada vocación transitológica.

En efecto, la película *No* tematiza la transición desde la publicidad política moderna, fundamento de la democracia, hacia el régimen de representación televisual y la consiguiente configuración de un orden mediático que termina por neutralizar los procesos de democratización y por organizar a las poblaciones como públicos y espectadores. La película muestra, entonces, en la escena local, el surgimiento y consolidación de una nueva ecología de medios en los que la democracia ya no puede ser pensada según su representación tradicional, masiva y participativa. A la vez, esta nueva ecología de medios constituye una *mediarquía* (Citton, 2019); esto es, un orden político mediatizado, en el que la imposición del tiempo coyuntural o televisivo sobre el tiempo social opera de manera distinta a la llamada sociedad del espectáculo y a la clásica crítica de la manipulación ideológica, constituyéndose en un nuevo hábitat que termina por consolidar el *statu quo*, subordinando de paso las dinámicas del desacuerdo y de la insubordinación al registro mediático y *memorializado* del *arché* tecnológico contemporáneo.⁶

Por lo mismo, no resulta sorprendente que, al cumplirse los 50 años del golpe militar, más de un tercio de los chilenos pareciera apoyar una lectura del golpe y de la dictadura que, según un estudio de *Market Opinion Research Internacional* (MORI), estaría lejos del rechazo y la condena. En efecto, en este informe titulado *Chile a la sombra de Pinochet* y publicado el 30 mayo del año en curso (el que está basado, a su vez, en el sondeo CERC-Mori), el 36% de la ciudadanía chilena considera que Pinochet “liberó a Chile del marxismo”, mientras que el 42% estima que el dictador destruyó la democracia y el 22% declara no tener idea. Habría que destacar que este barómetro viene midiendo las percepciones políticas en el país desde 1987, por lo que representa un archivo cuantitativo sobre las opiniones y las percepciones de la ciudadanía a lo largo del llamado periodo transicional. El estudio parte por dividir la población entrevistada y proyectarla en rangos generacionales, cuestión que le permite organizar los datos según tres grupos etarios, los que luego se triangulan con indicadores socio-económicos (nivel de educación) y socio-políticos (adscripción política).

6 Por supuesto, usamos esta noción (*mediarquía*) en términos descriptivos y no en términos prescriptivos, pues junto con advertir la porosidad de los tiempos mediáticos, habría que evitar caer en un determinismo de nuevo tipo. Es decir, incluso la configuración mediárquica, tecnológicamente soportada, está abierta a la posibilidad de *un espectador emancipado*.

Así, el informe nos dice:

Todo el que nació después de 1970 no tenía 18 años para el plebiscito de 1988, es decir que el votante de 18 años de 1988 (el plebiscito del 5 de octubre de 1988) hoy día tendría 53 años. Esta fecha marca un punto que podemos cuantificar para saber cuántos adultos chilenos vivieron los acontecimientos hasta ese hito histórico, el último de “la era de Pinochet”. Todos los menores de 53 años hoy en 2023, eran menores de edad entonces. De acuerdo al padrón electoral de 2021 de 15 millones de votantes, cerca del 30% (5 millones de votantes) de la población tiene hoy más de 53 años, es decir que dos tercios de los electores, 10 millones de chilenos no vivieron el 5 de octubre de 1988, hito que definió el fin de la dictadura. (MORI, 2023, p. 4)

Esto implica, *grosso modo*, que habría tres grupos definidos por su relación con el golpe. “El primero que corresponde a un tercio del electorado que alcanzó a votar en 1988 de 53 años y más, el segundo que alcanzó a tener edad adulta (que hoy tiene entre 36 y 52 años) cuando Pinochet fallece en 2006 que también constituye un tercio del electorado, y los que han vivido esa historia como del pasado, sin haber sido espectadores, el tercer tercio de 35 años y menos” (MORI, 2023, p. 4).

Las variables educacionales también parecen marcar diferencias pues, según el informe “un 58% de los chilenos dicen saber mucho y algo sobre el golpe de Estado de 1973. El 32% dice saber poco y nada, mientras el 19% no responde” (MORI, 2023, p. 5). Según los analistas del informe, esto se debe a las diferencias de clase y de niveles de educación de los participantes. Pero, obviamente estas indicaciones son bastantes generales pues, entre otras cosas, no se define el concepto de clase social y no está claro cómo los niveles de educación formal son complementados por aspectos no fácilmente cuantificables (situaciones biográfico-familiares, educación no formal, etc.), para no mencionar el carácter espurio de las categorías (“mucho y algo”, “poco y nada”). Sin embargo, más allá de estas limitaciones, el informe muestra dos cosas relevantes: por un lado, una fluctuación de las percepciones sobre el golpe y la dictadura en los años recientes, las que no terminan por inclinarse de manera decisiva hacia una interpretación crítica o favorable; y, por otro lado, la forma en que el paso de los años va transformando la opinión sobre el pasado gracias a las transformaciones demográficas en general y etarias en particular. De hecho, el informe destaca que desde más o menos el año 2013, la opinión favorable hacia el golpe y la dictadura ha crecido paulatinamente.

Respecto a la percepción del golpe, el estudio muestra que aquellos que lo consideran como una intervención liberadora (de la amenaza marxista) tienden a concentrarse en el tercio más viejo de la población, mientras que los nacidos después del 73 son críticos de esta versión. De manera similar, la percepción de la dictadura ha cambiado, cuestión que el informe presenta mediante una comparación entre los años 1989, 2001 y el periodo que va desde el 2005 al 2023. En este sentido, la conclusión es clara: la representación de la dictadura sigue siendo ambivalente en la población chilena aun cuando ha crecido el porcentaje que la ve como un proceso positivo:

En otras palabras entre 1989 y 2023 hubo altos y bajos de la opinión sobre el régimen, pero al final lo que hay hoy día, a los 50 años del golpe, es similar al punto de partida. Han transcurrido 33 años de régimen democrático, al menos dos generaciones que no conocieron la “Era de Pinochet”, pero la opinión pública resiste el paso del tiempo, las crisis políticas, económicas y sociales, con una posición más bien blanda sobre el régimen del General Pinochet. (MORI, 2023, p. 13)

Además de esta conclusión, la encuesta interroga a los participantes sobre la presunta responsabilidad del golpe, y concluye que el 24% se la adjudica a Pinochet y el 14% a Salvador Allende. Complementariamente, Pinochet es percibido “como un dictador para el 64% de los chilenos, como el hombre que impulsó y modernizó la economía chilena para el 39%, y como uno de los mejores gobernantes que ha tenido Chile en el siglo XX para el 20% de los chilenos” (MORI, 2023, p. 23).

El informe concluye que “a los 33 años de la reinauguración de la democracia y a 50 años del golpe militar Chile vive un resurgimiento del pinochetismo en medio de la crisis social, política y económica más importante desde el retorno a la democracia” (MORI, 2023, p. 25). Para luego enunciar una preocupación relativa al futuro: “es preocupante que los más jóvenes menores de 35 años tengan tan bajo conocimiento de la dictadura porque implicaría que a largo plazo se extinguiría el conocimiento de ella, si las generaciones más jóvenes van cada día sabiendo menos” (MORI, 2023, p. 25).

Los resultados parecen ser claros y preocupantes, a pesar de la confusa redacción del informe. Sin embargo, habría que tomar estos resultados *cum grano salis* no solo por sus rangos de confiabilidad y validez, sino también por la configuración misma de la batería de indicadores y por la traducción de datos estadísticos en hipótesis hermenéuticas que tienden a substantivar

percepciones y opiniones puntuales, convirtiéndolas en determinaciones actitudinales. Más allá de estos aspectos técnicos habría que considerar este estudio como una indicación no solo de la forma en que los chilenos se representan el golpe de Estado y la dictadura, sino también y principalmente como una indicación del clima político en el que se inscribe el mismo sondeo. En otras palabras, los “preocupantes resultados” del estudio (inéditos a nivel internacional, como tanto se insiste) deben ser contextualizados en el marco del rechazo al proyecto de la Convención Constituyente, rechazo que ha sido capitalizado por un fuerte discurso re-habilitador de la dictadura y del dictador. En contraste, podríamos preguntarnos cómo hubiesen sido los resultados del sondeo si este hubiese sido realizado en el contexto del plebiscito de entrada, cuyos resultados parecían sellar definitivamente el rechazo a la Constitución y al legado de Pinochet.

Sin embargo, más allá de todo esto, lo que hay que destacar es que el sondeo no puede evitar producir aquello que quiere cuantificar: por más objetivos y técnicamente confiables que resulten estos estudios, no pueden evitar reducir la temporalidad compleja de los procesos políticos a una representación superficial e intencionada de posiciones marcadas por baterías de preguntas convencionales, las que terminan por producir la misma realidad que quieren medir. En este sentido, este tipo de estudios no describe objetivamente la realidad política del país (no solo porque esa realidad objetiva es ya siempre producida), sino que la reduce a unas cuantas variables coyunturales. En otras palabras, estos estudios, al igual que el recorte de lo real distintivo de las lógicas mediáticas contemporáneas, tienen una fuerte dimensión performativa, son hechos políticos que terminan además por definir los énfasis de la misma política oficial.

Esto no impidió, por otro lado, que, una vez publicados los resultados del estudio, se haya producido una serie de reacciones tanto desde el gobierno como desde la oposición, confirmando el carácter performativo del sondeo; esto es, convirtiéndolo en un hecho político capaz de legislar las intensidades del debate público. En esto consiste precisamente la imposición del tiempo *événementielle* sobre el tiempo de la política tematizada por la película *No*. En la obliteración de la crisis neoliberal destapada por las revueltas sociales y en la recentralización del debate según los términos de un saber superficial que no puede evitar mistificar sus propios hallazgos. Así mismo, el miedo frente “al poco conocimiento por parte de las nuevas generaciones respecto al golpe y la dictadura”, no es sino un malentendido que descansa en la idea de que el golpe y la dictadura son hechos del pasado frente a los cuales solo cabe una relación de conocimiento. Uno podría preguntarse si los millones de chilenos que ocuparon las calles durante las revueltas del año 2019 necesitaron de un “conocimiento oficialmente

sancionado” respecto al golpe y la dictadura, pregunta que delata cómo la preocupación de los analistas del informe no es solo convencional, sino que, junto con recentrar la autoridad hermenéutica en un concepto tradicional de saber, no alcanza a percibir que el horizonte de sentido de las encuestas y los recortes mediáticos de la política oficial no logra trascender la matriz mediárquica distintiva de la gubernamentalidad contemporánea.

En otras palabras, ¿qué sería un conocimiento adecuado del golpe y la dictadura?, ¿cómo medirlo?, ¿cómo sancionarlo?, ¿no es evidente acaso que la preocupación expresada en la conclusión del informe delata la ansiedad propia de un razonamiento que piensa su relación con la historia, con sus actores y sus procesos desde el punto de vista de un concepto demasiado convencional de saber? En efecto, si la revuelta, como se ha insistido bastante, es una interrupción de la temporalidad histórica, también es una suspensión de las relaciones convencionales entre teoría y práctica, una destitución del consentimiento y de la transferencia que desobedece las lógicas normativas del saber y del poder. ¿Cómo pensar entonces el tiempo de la revuelta frente al tiempo coyuntural de la mediarquía y de la encuestología? Pues es aquí donde las revueltas funcionan des-programando y arruinando la programación mediárquica que sustenta a la gubernamentalidad actual. Si, como ha indicado Furio Jesi (2013) en relación con la revuelta espartaquista de 1919 en Alemania, la revuelta, a diferencia de la revolución, no se presenta como aceleración o realización del tiempo histórico, sino como su suspensión, también podríamos agregar que, en la medida en que estas interrumpen el régimen mediárquico contemporáneo, funcionan como un procesos de des-programación que anarquiza el *arché* de la *mediarquía*; es decir, anarquiza el aparato sensorial capturado por la anestesia compulsiva de la hiper-conectividad mediática contemporánea.

3. Re-habilitación

Sin embargo, no se trata solo de criticar la reducción de los procesos sociales al tiempo coyuntural de los medios, sino de mostrar cómo, en este caso, los resultados de la encuesta tienen un efecto legislativo que regula el ámbito de la discusión nacional; es decir, el informe junto con expresar un desasosiego relativo a la poca claridad con respecto al pasado dictatorial, no puede evitar constituir un horizonte de verosimilitud en el que se inscriben y se despliegan los énfasis y las prioridades de una práctica política acotada al tiempo mediático y coyuntural de los sondeos y los saberes transitológicos. En este sentido, las encuestas producen y sancionan una imagen chata y deshistorizada de lo real, una imagen que reduce las diferencias políticas a un problema meramente técnico o administrativo. Sin embargo, el contexto

específico en que aparece este estudio nos permite apreciar un efecto performativo complementario, nos referimos a la convergencia del informe, y de la imagen que este informe nos entrega de la actualidad, con una serie de estrategias complementarias destinadas a producir una re-evaluación histórica y una rehabilitación del golpe y de la dictadura.

Por ejemplo, en su nuevo espacio de entrevistas, *En persona*,⁷ Cristián Warnken le pregunta al invitado y vicepresidente del Partido Republicano, Luis Silva, por su relación con la figura de Pinochet, y este responde:

Hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista, ¿no? Definitivamente, un hombre que supo conducir el Estado, supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas. Lamentablemente, durante su tiempo a cargo del del Gobierno de Chile ocurrieron cosas que él no podía no conocer y que habría por lo tanto justificado, y que son atroces, y eso obviamente mancha lo que hizo por Chile; pero yo creo que a la distancia de, bueno, 50 años desde el 73, o unos 17 menos hasta el término del del Gobierno de Pinochet, yo creo que debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno y no simplificarlo o reducirlo, con toda la gravedad que tienen esos 17 años, a las violaciones de los derechos humanos, porque entonces creo que nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia, y cuando eso ocurre evidentemente que somos muy malos intérpretes del presente (minuto 59 y siguientes). (Silva, 2023)

Como se ve en esta opinión de Silva, la reevaluación del golpe y la dictadura se hace posible por una comprensión matizada del pasado histórico. En su caracterización no hay una negación de los excesos y brutalidades de la dictadura, si no una demanda por equilibrar la balanza del juicio histórico y contrastar esa imagen negativa de la dictadura, entendida como el mal absoluto, con una imagen matizada que nos permita atender a su gestión gubernamental. Por supuesto, dicha gestión gubernamental es exactamente lo que hay que discutir y en este sentido, parte de las

⁷ El ciclo “*En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro*”, organizado por ICARE, se autodefine como “un espacio basado en dialogar, empatizar, conocer y respetar las ideas, algunas veces contrarias, del otro. Es decir, conocer la visión de nuestros invitados sobre la vida, el país y el futuro”. Luis Silva fue invitado el día 28 de mayo, luego de obtener la primera mayoría nacional en las elecciones de los consejeros constitucionales el 7 de mayo del mismo año, representando al Partido Republicano. La entrevista está disponible en el sitio de ICARE en YouTube. Por otro lado, más allá de las pretensiones intelectuales de Warnken, habría que pensar su ‘gestión cultural’ como síntoma, menor y criollo, de la mediarquía post-dictatorial.

limitaciones habituales en la caracterización del régimen militar están relacionadas con el énfasis exclusivo en sus estrategias represivas, cuestión que ha demorado un análisis profundo sobre la ingeniería económica y política implementada, *manu militari*, en ese periodo.

Por supuesto, la opinión de Silva surge de lo que podríamos llamar un razonamiento político balanceado, en la medida en que, puestas las cosas en su balanza histórica, los elementos positivos del régimen militar y la capacidad de dirección política de Pinochet como estadista parecieran pesar más que los excesos y brutalidades innegables asociadas con su régimen. Sin embargo, detrás de este modelo evaluativo opera un principio de comparación fundamental; esto es, un principio de equivalencia que consiste en justificar los efectos negativos, los llamados daños colaterales, desde los efectos positivos que terminarían justificando dichos excesos. En otras palabras, detrás de este razonamiento ponderado y de esta demanda por una reevaluación, aparece la lógica del ‘mal menor’ que ha justificado no solo la historia sangrienta de las ‘guerras justas’ occidentales, sino ahora también el reverso brutal de los procesos de modernización autoritarios, necesarios para la implementación de la gubernamentalidad neoliberal. En este sentido, Silva expresa una opinión sectorial que está, a su vez, basada en una lógica instrumental (el fin justifica los medios) de profunda raigambre teológica, desde donde se comprende la naturaleza del revisionismo de la derecha chilena y sus intentos de re-habilitación del golpe y la dictadura.

Lo importante de la opinión de Silva, por supuesto, no es su densidad teórica o su fundamentación histórica, sino en cambio el hecho de que representa de forma más o menos articulada un lugar común en la nueva derecha chilena; esto es, en la derecha que no tiene problemas en abandonar la figura de Pinochet ni en denunciar sus excesos y brutalidades, pero sigue atada a su modelo de gubernamentalidad, modelo que termina siendo fetichizado y convertido en condición *sine qua non* de la democracia contemporánea⁸. En este sentido, denostar la figura del dictador sin

8 Por supuesto, usamos esta noción (nueva derecha) de manera descriptiva, no discriminatoria, pues interesa atender a esta reconfiguración del pensamiento de derechas en Chile, para aprender sus metamorfosis internas, las que están relacionadas con las mismas metamorfosis del golpe, esto es, con su reiteración menos espectacular. Nos referimos no solo a la derecha post-pinochetista y popular que se distancia del militarismo y sus ideologías contra-insurgentes, mediante la penetración en sectores poblacionales (UDI), sino también a la redefinición de un centro político (RN y DC), que prioriza por la estabilidad institucional y las garantías constitucionales, más allá de la figura emblemática de Pinochet (Piñera, Desbordes, Mariana Aylwin, etc.). Por otro lado, más allá de este escenario, habría que considerar las recientes contribuciones de gente como Hugo Herrera y Daniel Mansuy, para no hablar de los *think tanks*, pues es allí donde se juega una operación de revisión del pasado histórico, que alcanza incluso a ‘voceros’ como Carlos Peña o Lucy Oporto. Por otro lado, habría que atender al surgimiento de la plataforma liberal de evolución política, *Evópoli*, y al agrupamiento de los sectores conservadores en el Partido Republicano, como efectos de una mutación al interior de un “sector” que no termina de arreglar cuentas con la dictadura y su legado.

cambiar su legado pareciera ser algo en que el gobierno y la oposición están de acuerdo, siempre que no se altere demasiado el escenario de este *teatro soberano*.

No deberíamos olvidar que esta operación balanceada descansa en una caracterización simplificada de la dictadura. Por un lado, la dictadura sería el régimen de gobierno que rescató a Chile del abismo o del caos producido por la Unidad Popular, mientras que, por otro lado, y precisamente para lograr este necesario rescate, la dictadura habría incurrido en violaciones a los derechos humanos, lamentables pero inevitables. Hacer aparecer las violaciones a los derechos humanos como excesos puntuales inscritos en la agenda de refundación del contrato social chileno es precisamente el objetivo central del revisionismo histórico emprendido por la nueva derecha chilena (ocultando, de paso, las lógicas de subjetivación sacrificial y sujeción de la gubernamentalidad neoliberal).

Recordemos que el famoso debate sobre el revisionismo histórico, que ocurrió en la Alemania de los años 1980s, estaba marcado por la oposición de Jürgen Habermas a la caracterización del nazismo desarrollada por el historiador conservador Ernst Nolte (Habermas, Nolte, 2011), como un régimen que había incorporado a la lógica brutal de la devastación y del genocidio asiático simplemente las cámaras de gases. El argumento del Nolte consiste en mostrar que el Nacionalsocialismo se justificaba como una reacción tanto a los genocidios turcos de la población armenia, como a los genocidios soviéticos en el proceso de colectivización forzada impulsada por el régimen de Stalin. En este contexto, la *Shoah*, o destrucción del pueblo judío, no es sino la inscripción de un proceso de genocidio que bajo ningún punto de vista es inédito, pero que adquiere un carácter monumental en la medida en que ocurre en el corazón de Europa. La singularidad del proceso nacionalsocialista queda entonces reducida, gracias a una operación de reevaluación y rehabilitación comparativa, a una cuestión de énfasis; esto es, el Holocausto se diferencia de otros procesos similares solo por la implementación de los campos de concentración y las cámaras de gases. Frente a esta revisión, que no puede ser sino una justificación, elaborada por Nolte pero diseminada en el horizonte del pensamiento reaccionario contemporáneo, Habermas reacciona mostrando cómo la simplificación del proceso histórico alemán permite subsanar la herida histórica de una Alemania desgarrada por la brutalidad del régimen Nazi. Si el argumento de los revisionistas consiste en no reducir la historia alemana al periodo que va entre 1933 y 1945, la consecuencia de esa demanda no puede ser otra que la de denegar y blanquear la brutalidad del régimen Nazi apelando a una supuesta historia excepcional de la Alemania imperial. Lo que Habermas descubre en esta operación no es sino la denegación de un debate necesario

sobre las causas y consecuencias profundas del Nacionalsocialismo, debate necesario decíamos, para la correcta reorganización de una Alemania de posguerra orientada hacia Europa y su democracia. En otras palabras, contra el revisionismo que funciona como un ajuste de las disonancias cognitivas con respecto al papel de Alemania en el exterminio, Habermas opone la necesidad de mantener una relación abierta con la historia (cuáles son los límites de esa historia en Habermas, es, por supuesto, otro problema relevante), para no mitigar la brutalidad del Holocausto ni naturalizarla en el horizonte de un razonamiento reconstructivo y comparativo, pues detrás de ese razonamiento opera el mismo principio equivalencial que nos permite blanquear la dictadura apelando a sus supuestos logros administrativos.

Por supuesto, no estamos reduciendo la singularidad del pensamiento de la nueva derecha chilena a un caso tardío de Nacionalsocialismo. Lo que enfatizamos, sin embargo, es que ambas operaciones de revisión son posibles por la existencia de un principio comparativo y equivalencial que permite justificar los horrores de la historia a partir de convertirlos en situaciones puntuales e inevitables. Por otro lado, no se trata de seguir insistiendo en la herida melancólica y el desgarramiento originario perpetrado por la dictadura, sino de entender que esta operación de blanqueamiento no solo intenta justificar los excesos dictatoriales sino, y sobre todo, intenta blanquear la continuidad de la gubernamentalidad neoliberal en el contexto de la limitada democracia contemporánea. Es aquí donde el debate se hace realmente importante pues se muestra como una disputa por la historia que es también una disputa por el presente. En este sentido, lo que en las opiniones de Luis Silva aparece como una versión simplificada y masificada, adquiere un rasgo de mayor elaboración intelectual en la reciente monografía de Daniel Mansuy titulada *Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular* (2023).

Se trata de un libro constituido por 30 capítulos y cuatro apéndices. Los primeros 15 capítulos dedicados a la tragedia del gobierno de Salvador Allende, los segundos 15 capítulos dedicados a la prolongación del espectro de Allende, convertido en enigma y en veneno que, de una u otra forma, determina y limita fuertemente las posibilidades de acción de las generaciones que heredan su legado. Se trata de una intervención inteligente, bibliográficamente bien fundamentada y estructurada en torno a una operación de lectura que consiste, por un lado, en responsabilizar a Salvador Allende de la crisis de la Unidad Popular, llegando incluso a convertirlo en el responsable de su propia muerte; esto es, mediante un malabarismo argumental eficiente, Allende aparece como el responsable final del golpe de Estado, mientras que el mismo golpe de Estado aparece como el resultado inevitable de una mala gestión gubernamental. Por otro

lado, en la performance sacrificial de Salvador Allende, expuesta de manera ejemplar en sus últimos discursos del 11 de septiembre de 1973, Mansuy adivina una operación aún mucho más macabra que la de suicidarse para mantener su lealtad con el pueblo. Según su lectura, los discursos de esa mañana del 11 de septiembre están destinados a prolongar su presencia en el horizonte de la política chilena contemporánea, mediante la inoculación de un desasosiego que funciona como un legado ponzoñoso que limita la capacidad política de la izquierda nacional (la que para Mansuy desemboca en el Frente Amplio y en el gobierno de Gabriel Boric).

Coherentemente, la segunda parte intenta evaluar la ambigua relación que la izquierda post-allendista ha mantenido con la figura de Allende, aludiendo a la idea de que esta figura funciona como una especie de carga o ‘peso de la historia’, peso que le habría impedido desarrollar un proceso de renovación radical y necesario para modernizar nuestras formas de comprender la práctica política. En la medida en que seguimos atrapados en la figura mítica de Salvador Allende, no hemos sido capaces de elaborar nuestro pasado y abrir una discusión realmente política. En este sentido, el libro de Mansuy se presenta como una operación de *desmitificación*, sin advertir que toda desmitificación arriesga la re-inseminación de un nuevo mito.⁹ En otras palabras, la coherencia del argumento del libro no alcanza a esconder sus vacíos, pues en esta narrativa que combina las artes de la desmitificación con las estrategias de la culpabilización, nada se dice sobre el complot internacional que limitó fuertemente la administración de la Unidad Popular; nada se dice de los intentos de golpe de Estado que anteceden a la intervención del 11 de septiembre; nada se dice de la operación soberana de la dictadura y de su orquestada refundación de la sociedad nacional; nada se dice rigurosamente de las limitaciones estructurales de la democracia protegida chilena de post-dictadura, de su sistema electoral y del duopolio como prueba de la función neutralizadora de la política oficial; pero tampoco se dice nada respecto a la perpetuación criminal del modelo de gestión neoliberal, para no mencionar la corrupción estructural que ha acompañado a estas administraciones postdictatoriales y que se expresa de manera clara en la proliferación de casos de corrupción, tanto a nivel de las corporaciones privadas como a nivel de las instituciones del Estado.

En otras palabras, nada se dice de la dictadura como un restablecimiento de las relaciones de apropiación y privatización, ni menos se mencionan sus prácticas de expropiación y cancelación de las conquistas democráticas alcanzadas por el pueblo chileno durante el siglo

⁹ Ver la reciente (21 de junio) recensión crítica del libro de Mansuy por Mauro Basaure en el periódico electrónico *El mostrador*, titulada: *Por qué leer con precaución “Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular”*.

XX. Todo esto aparece como condición natural de una narrativa que se conforma con determinar responsabilidades a partir de un relato que no alcanza a comprender ni siquiera sus propias condiciones de posibilidad. Es decir, el libro presenta un nudo argumental que opera mediante la adjudicación de la responsabilidad final del golpe y de la crisis política de estos cincuenta años a Salvador Allende, a su persona y a su mítica figura, sin decir nada sustantivo respecto al juego de fuerzas económicas y geopolíticas en las que se inscribe el proceso histórico nacional, como si las condiciones implementadas por la dictadura constituyeran un trasfondo natural e incorruptible en el que los actores políticos se desenvuelven. Dicho brevemente, el libro de Mansuy contribuye a la naturalización de la revolución capitalista en Chile y al blanqueamiento de sus costos, los que alcanzan indudablemente nuestra actualidad.

En efecto, la intervención de Mansuy constituye una operación articulada, en base a una selección parcial e intencionada de referencias, que no cala profundamente en la comprensión del proceso histórico. Sin embargo, resulta eficiente para la producción de una narrativa más o menos estandarizada que permite, por un lado, elaborar una crítica del Frente Amplio y del gobierno de Boric, mientras que, por otro lado, sienta las bases para una rehabilitación del golpe y la dictadura, ahora sí informada y abierta a la misma *ponderación* que demandaba el consejero Silva. Por supuesto, no nos interesa descalificar ni prevenir la lectura de un libro que no por casualidad se ha convertido en un éxito de ventas, sino que advertir la ironía de que una versión simplificada del pasado histórico nacional, organizada en torno a un proceso de desmitificación y culpabilización inverosímil, se constituya en un discurso legítimamente posibilitado por una coyuntura política totalmente subsumida al tiempo mediático de la gubernamentalidad neoliberal. En este sentido, no se trata de responder contra-factualmente la intencionada reconstrucción histórica elaborada por Mansuy, sino mostrar que esta misma reconstrucción, hecho el hilo de la responsabilización y de la culpabilización, termina por eximir a los agentes responsables del golpe y la dictadura de toda responsabilidad, adjudicándosela al carácter inestable de Salvador Allende y su legado. El asesinato, el crimen, la tortura, el exilio, los abusos policiales, la concentración insólita e indecente de la propiedad y la riqueza, la corrupción estructural de las fuerzas armadas y de orden, la represión de las revueltas y las prácticas de amputación ocular y abuso en general, además de la insostenible falta de entereza moral de las instituciones castrenses todavía hoy coludidas en torno al secreto relativo al paradero de los detenidos desaparecidos, todo eso y mucho más, no aparece en esta narrativa, y si lo hace pareciera explicarse por el peso de la historia y por el mito de Allende.

Esa es, precisamente, la mitología desmitologizadora que moviliza este libro y que es posible por la predominancia de un tipo de debate intelectual vaciado de complejidad histórica y teórica. En efecto, el libro super-ventas de Mansuy participa de la misma comprensión histórica expuesta en la película de Larraín, como si fuera parte de las campañas televisivas que se encargaron de prolongar la herencia dictatorial en la post-dictadura. Frente a esta amalgamada situación, en la que complicitan los expertos transitólogos, los encuestólogos, los agentes de la televisualidad mediárquica y los nuevos intelectuales de una derecha que, pretendiendo renovarse, no logra arreglar cuentas con el lastre dictatorial, habría que seguir insistiendo en la necesidad de mantener abierta la pregunta por la historia y, en lugar de conmemorar los 50 años del golpe con la secreta esperanza de que se trata de un problema del pasado, habría que comprender la profunda imbricación entre las lecturas oficiales de nuestro pasado y las manifestaciones anti-democráticas de una derecha que sigue siendo fiel a su historia.

Bibliografía

- Basare M. (2023). Por qué leer con precaución “Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular”. *El mostrador*, 21 de junio, disponible en <https://encr.pw/Pebnh>
- Citton, Y. (2019). *Mediarchy*. Polity.
- Cristi R. y Ruiz-Tagle, P. (2007). *La república en Chile. Teoría y práctica del constitucionalismo republicano*. Ediciones LOM.
- Fundación Sol (2013). Los 11 pilares dictatoriales que sostienen el actual modelo. *El mostrador*, 12 de septiembre, disponible en <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/09/12/los-11-pilares-que-sostienen-el-actual-modelo-economico-y-son-herencia-de-la-dictadura/>
- Guzmán, P. (Director). (1975). *La batalla de Chile. Volumen I: La insurrección de la burguesía* [Película-documental]. Equipo Tercer Año, Con la colaboración de Chris Marker (Francia), ICAIC (Cuba).
- Habermas, J. Nolte, E. y Mann Th. (2011). *Hermano Hitler*. Herder.
- Jesi, F. (2013). *Spartakus. Simbología de la revuelta*. Adriana Hidalgo editora.
- Larraín, P. (Director). (2008). *Tony Manero* [Película]. Producción Fábula-Prodigital.

- Magasich Airola, J. (2020). *Historia de la Unidad Popular, volumen II. De la elección a la asunción: los álgidos 60 días del 4 de septiembre al 3 de noviembre de 1970*. Ediciones LOM.
- Mansuy D. (2023). *Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular*. Penguin Random House.
- MORI. (2023). *Chile a la sombra de Pinochet. La opinión pública sobre la “era de Pinochet”, 1973-2023*. En: <https://www.docdroid.net/iqt2u5M/chile-a-la-sombra-de-pinochet-pdf>
- Silva, L. (2023). *En Persona: ICERE, Mayo 30, entrevista conducida por C. Warken, accedida el 10 de julio de 2023, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=iYNiN9BHRR8>*